

Hacia un concepto de seguridad local: Los casos de Quilmes y Avellaneda (2015-2018)

Autor: Mariano Martignago

Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Quilmes

Correo electrónico: marianomartignago@gmail.com

Resumen:

Este trabajo parte de indagar la relación entre los gobiernos locales/ municipales y la seguridad como problema público, planteando que es necesario poner el foco de análisis en las políticas públicas que llevan a cabo estos gobiernos, al ser una relación poco estudiada y en crecimiento. De aquí que la ponencia se centra en definir a la seguridad desde lo local, a partir primero de un desarrollo conceptual sobre desde dónde partimos al hablar de seguridad. Segundo, una discusión basada de la bibliografía sobre los procesos y características de la relación entre gobierno local y seguridad, entendiendo la existencia de un proceso de *responsabilización* que modificó esta situación y generó cambios en las administraciones locales. En un tercer movimiento, el desarrollo puntual de dos casos de estudio; el municipio de Quilmes bajo la gestión del intendente de Cambiemos Martiniano Molina y el municipio de Avellaneda en la administración de Jorge Ferraresi, del Frente Para la Victoria. De su análisis, se realizará una comparación de las políticas desarrolladas por municipios políticamente distintos. Estas consideraciones nos permitirán clarificar la relación y características entre gobierno local y seguridad, y proponer un concepto de *seguridad local*.

Introducción

La investigación aquí presentada, forma parte del desarrollo de mi tesis de grado en la Licenciatura en Ciencias Sociales, en la Universidad Nacional de Quilmes. Para ese fin, estudió la relación entre la seguridad como problema público y las respuestas de los gobiernos municipales / locales¹, a partir del estudio de los casos de Quilmes y Avellaneda en el periodo 2015-2018. En este sentido, el trabajo se centrará en la discusión bibliográfica y de fuentes sobre las características del tema y presentara resultados de la investigación en ambos municipios. Durante su desarrollo se buscará proponer un concepto de *seguridad local* para poder describir este proceso. Para ello, primero se discutirá una definición de seguridad; explorando las características de esta relación y los procesos entre gobierno local y seguridad, planteando la existencia de un proceso de *responsabilización*, entre otras cuestiones, que

¹ A lo largo del trabajo, usare gobierno local o municipal como sinónimos.

modificaron la situación y generó cambios en las administraciones locales. Luego se presentan y comparan los casos de Quilmes y Avellaneda, a partir del desarrollo breve de su estructura, definiciones y políticas públicas desarrolladas.

La seguridad como problema público

La discusión de la (in)seguridad conlleva un amplio conjunto de perspectivas y definiciones englobadas, según los actores que forman parte de la discusión. Dos perspectivas son útiles para describir la relación: aquella construida desde el análisis sociológico y la que surge desde los estudios de las políticas públicas.

La política pública surge a partir de un hecho determinado, considerado como un problema. Desde esta visión, la definición de qué es considerado problemático, así como los actores que participan en la misma, entre otras cuestiones, modifican la forma en que el problema es distinguido y, por consiguiente, la política pública desarrollada. Es por eso que el surgimiento de la seguridad como problema, responde a una determinada construcción del mismo e implica el surgimiento de diferentes concepciones, las cuales se entrecruzan continuamente sobre cómo comprenderlo y el *que hacer*. Estas respuestas, dependen en gran medida de los actores que los formulen -los cuales a su vez pugnan por imponer su definición o sus soluciones- mostrando lo complejo que se transforma un campo a la hora del desarrollo de políticas y la comprensión de las relaciones entre los actores (o del propio análisis científico). Como la investigación se enfoca en las políticas públicas, se parte de entender que estas se construyen de una determinada manera a partir de su reconocimiento en la agenda y en donde ocurren una serie de *“decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos - cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían- a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo.* (Subirats, 2009:39).

Desde una perspectiva sociológica, la (in)seguridad se convierte en un problema público relevante en las últimas décadas, producto de un aumento tanto de los indicadores objetivos de la seguridad (una mayor cantidad de delitos ocurridos) así como de los subjetivos (el aumento de la inseguridad o miedo al delito); esto es compartido por distintos autores (Míguez e Isla;2010) (Kessler, Bruno;2018) así como observable en distintas encuestas de victimización o de problemas identificados por la ciudadanía (Latinobarómetro;2016) (INDEC;2018). Teniendo en cuenta además, que tanto la victimización como la inseguridad, varían según las regiones donde se analice pero encontrando su centro en las ciudades, compartiendo un conjunto de experiencias, consensos y categorías entre actores involucrados.

Galar (2017) lo complejiza señalando que, la legitimación acumulada por la problemática, le permite mantenerse a pesar de posibles fluctuaciones en su tratamiento en la agenda política y mediática. Donde, distintos acontecimientos son registrados por la audiencia pública -en general a través de los medios de comunicación- y moviliza determinadas referencias y experiencias que construyen una concepción del problema. Estas narrativas configuran elementos que se estabilizan, conteniendo definiciones que se comparten y se arraigan en este “sentido común” (Kessler;2009). La seguridad como problema se encuentra en una legitimación constante, producto de su recuperación desde la política y el periodismo; lo cual produjo una apertura del tratamiento de lo delictivo hacia círculos por fuera de los tradicionales (Lorenc Valcarce;2005) así como el aumento del interés académico.

Por último, no debe dejarse de lado que todos estos procesos, tienen un sustento estructural el cual explica estas lógicas. De aquí que podemos recuperar la tesis de Castel (2006) quien asocia la nueva preocupación del delito, como parte de un nuevo conjunto de sensibilidades por parte de la sociedad, así como el análisis que propone David Garland (2005) sobre el cambio en las formas de experimentar el delito.

¿Qué entendemos por seguridad?

El concepto seguridad comprende un conjunto de ejes que excede a los propósitos y capacidad de análisis, por lo cual se intentará de manera breve y puntual, realizar una reducción hasta llegar a una mirada más específica. Estas definiciones surgen desde distintas perspectivas contemplando diversos niveles de análisis, los delitos distinguidos, los actores participantes, los posibles campos de acción, o las formas que tome la política pública.

Reducir el foco de análisis, permitirá establecer claramente que analizar, para ello se desarrollara primero, la idea de seguridad en general, a continuación el concepto de *seguridad pública*, de ahí discutir algunas concepciones de qué se entiende por *seguridad ciudadana* y desde allí proponer una idea de *seguridad local*. La *seguridad* es un concepto que -en primera instancia- se entiende como aquellas cuestiones relacionadas al mantenimiento de la paz y el orden en un determinado espacio, un objetivo deseable -la reducción de incertidumbre y amenazas- a través de distintas acciones. Esta definición de carácter genérico, puede comenzar a completarse con un amplio conjunto de cuestiones, llegando a una noción que gire en torno a la defensa de intereses neurálgicos de los Estados, como la soberanía y la autonomía, tales como la defensa nacional, la ciberseguridad, etc. Estos propósitos exceden a al objeto, siendo necesario delimitarlo.

De la división básica entre seguridad relacionada a la defensa, pasamos a aquella vinculada a una seguridad interior de carácter democrático. Aquí dentro confluyen una serie de definiciones que contemplan un número cuestiones que muchas veces se solapan o confunden, donde no obstante se reconocen una serie de derechos que no deben ser vulnerados ni en nombre de la “seguridad”. Utilizaré como base el concepto de *Seguridad pública* el cual se limita a la seguridad de la comunidad, es decir, a garantizar el goce de los derechos y libertades de las personas en un determinado espacio; donde el estado debe promover una situación de seguridad pública, donde los derechos de las personas queden garantizados. El gobierno de la seguridad pública, comprenderá a las acciones institucionales y sociales orientadas a resguardar y garantizar las libertades y derechos de las personas, frente a aquellos hechos socialmente dañosos o ilícitos que acorten alguna libertad ciudadana fundamental. (Sain;2002) (Sain:2008). Agregando a ello una característica tomada de Recasens (Recasens;2007): la *seguridad pública* es competencia de las instancias públicas, quienes deben mantener y restablecer -de ser necesarios- las condiciones de un estado de convivencia que permita el ejercicio de derecho y libertades. En un estado de convivencia que los ciudadanos esperan determinadas condiciones para esta convivencia, entendiendo que estos parámetros se modifican según su contexto.

Teniendo en cuenta estas características, una política de seguridad pública es el conjunto de *estrategias e intervenciones públicas* implementadas por actores tanto públicos como privados, en pos de abordar y resolver conflictos o riesgos de carácter violento o delictivo que sean concretos o potenciales. Esta política que intenta gestionar una forma de conflictividad social (manifestado en hechos delictivos o violentos), dependerá a su vez de cómo se construye socialmente este “estado de convivencia” y en qué condiciones.

El concepto de *seguridad ciudadana*, mantiene distintas acepciones, con múltiples dimensiones según cómo lo utiliza cada autor o institución y hasta utilizado indistintamente con *seguridad pública*. Siendo pertinente dar una serie de ideas sobre ella, que permitan articular un concepto general y especifique sus ejes.

Una primera idea de ella, se continúa de Recasens quien la define como: parte de la seguridad pública, que consiste en la garantía en prevención, protección o reparación de la integridad y disfrute-posesión de sus bienes por parte de los ciudadanos. Una segunda idea plantea que es un conjunto organizado y estructurado de acciones que buscan generar situaciones, bienes y servicios públicos para satisfacer demandas de los ciudadanos, transformando condiciones de vida o modificando comportamientos para que se correspondan con la ley y moral propios de una comunidad (Gomez Rojas;2008). Una tercera centrada en: “*La seguridad ciudadana*

comprende una serie de ideas y actividades destinadas a prevenir y reducir la violencia, a promover la seguridad pública y el acceso a la justicia, a fortalecer la cohesión social y a reforzar los derechos y las obligaciones mutuas entre el Estado y los ciudadanos.”

(Muggah;2017); donde lo importante será la presencia de un estado y una ciudadanía activa.

Una cuarta idea y que consideramos importante, es aquella que el Programa de Naciones Unidas (PNUD;2012) construye a partir de sus conceptos de desarrollo humano y seguridad humana (condición de vivir libre de temor y libre de necesidad). Aquí, la *seguridad ciudadana* nace de una concepción limitada de seguridad humana, al relacionarse con la seguridad personal y especialmente con amenazas como el delito y la violencia. No obstante, no solo se relaciona con la reducción de índices vinculados a la cuestión, sino que lo piensa desde la protección del núcleo básico de derechos en busca de la mejora de la calidad de vida de la población.

Como planteamos anteriormente, el concepto de *seguridad ciudadana* llega a contemplar diversos alcances según las definiciones, esto queda al descubierto principalmente con el último concepto del PNUD. Desde estos cuatro puntos, podemos señalar que: la *seguridad ciudadana*, se inscribe como parte de un concepto de seguridad más abarcativo, pone al ciudadano como actor central y con capacidad de articular demandas, encuentra al delito y las violencias como problemas centrales, y tiene como epicentro la defensa de bienes y la integridad física. La ciudadanía tiene un carácter doble: el ejercicio de sus derechos y también como participantes en la intervención sobre los marcos de convivencia, niveles de violencia y control. Esto lleva a que sea necesario limitar aún más el rango que abarcan estos conceptos, para lo cual se propone un concepto de *seguridad local* centrado en las características de los gobiernos locales como parte del desarrollo de políticas públicas.

Gobierno local - seguridad

Por el lugar ocupado en la estructura organizativa del estado, el municipio se encuentra limitado normativa, presupuestaria y organizativamente respecto a sus capacidades de gobernar la seguridad. No obstante, la emergencia de demandas de los ciudadanos en torno a la (in)seguridad frente a determinados delitos de tipo urbano principalmente, generó que estas instancias comiencen a generar una serie de respuestas. Principalmente, por el rol relevante del gobierno local como entidad política responsable de la toma de decisiones vinculadas al territorio, donde el espacio público, comienza a percibirse como peligroso.

Proceso de responsabilización.

Si seguimos a Binder (Binder; 2016) son distinguibles tres etapas de esta relación: una primera donde frente al malestar, el intendente era un canal hacia las autoridades responsables, una segunda donde los municipios cooperan con la fuerza policial cercana, vista como el agente de mayor importancia, mediante financiamiento; y una tercera etapa donde los gobiernos aumentan su participación en el diseño y ejecución de políticas.

En este contexto, los actores locales tuvieron que generar una serie de respuestas frente a la ciudadanía que constan del desarrollo de políticas más allá de sus competencias como actor legal. A partir de aumentos de presupuesto, dispositivos de patrullajes municipales, observatorios, videovigilancia entre otras, buscaron responder a esta situación.

La responsabilización se produce ante la existencia de un cambio en el lugar de las demandas, que impulsó el desarrollo de nuevas formas municipales de enfrentar al delito y la violencia. La creciente demanda de “*mayor seguridad*” es posible marcarla como el resultado de un aumento de los índices delictivos², el asentamiento del sentimiento de inseguridad en la población y la construcción de esto como un problema político y social relevante, que se ubica entre las principales preocupaciones de la población argentina y, específicamente, en las ciudades, tal como lo plantea Santiago Fernández (Rodríguez Games, Fernández, Sain; 2016). El desarrollo de la delincuencia y la violencia en la ciudad, producen una serie de condicionamientos en los hábitos y prácticas de algunos sectores de la población, que conlleva consecuencias en la forma de vivir y apropiarse la ciudad, así como de votar.³

Este conjunto de situaciones reubicó y redefinió responsabilidades desde los actores tradicionalmente competentes (gobierno provincial o nacional, por ejemplo) hacia otros -los gobiernos locales- que debieron *responsabilizarse* de estos reclamos como parte de un proceso de “descentralización” (Sozzo;2009).

Los actores políticos municipales -en especial los intendentes- como autoridades con mayor cercanía y legitimidad (en general) con la población, deben responder a estas dinámicas en pos de mantener legitimidad. La seguridad considerada como bien público valorado, requiere respuestas por parte de un actor pertinente para desarrollar iniciativas, debido a su cercanía al territorio, la capacidad de captar demandas directamente y trabajar en contextos microsociales (Salazar;2007). No solamente los gobiernos, sino también quienes actúan como oposición en el campo político, transforman sus discursos, políticas de seguridad o buscan

² A pesar que la estadística sobre victimización en el país es reducida, ya que desde 2008 hasta el 2015 no se publicaron indicadores desde el gobierno Nacional, podemos marcar algunos trabajos que analizaron la coyuntura argentina, como la primera encuesta de victimización realizada por INDEC (INDEC;2018) (13,6% del total país de delitos contra el hogar y 19,9% delitos contra la persona) o los resultados de la ENES-PISAC (Kessler, Bruno;2018). En este último trabajo, a partir de una encuesta a hogares sobre la estructura social, se abordaba la victimización encontrando en el periodo del trabajo (2014-2015) un 33,4% a nivel país según hogar, y un 42% en los partidos del conurbano.

³ Desde la perspectiva del trabajo, en el nivel local la seguridad es una variable importante en la disputa electoral.

mecanismos de participación de la comunidad (según los casos) para sostener su legitimidad u obtenerla (Ruiz Vasquez, 2005). En el caso argentino, los intendentes buscan generar una figura de “*gestor de los problemas de la población*” para asentar su figura política mediante la construcción de una “preocupación” y una reacción frente al problema.

Uno de los puntos centrales en esta *responsabilización* es la distancia con las capacidades, así como en la percepción de la población sobre “quién debe hacerse cargo”, lo cual repercute en la discusión política. Las instancias provinciales y municipales muchas veces entran en tensión sobre quien debe “dar respuestas” frente a un hecho o reclamo. Esto también depende de las diferencias partidarias o no; la forma de construirse como “gestores” se modifica sustancialmente, según la relación partidaria con el gobierno provincial o nacional. Si el intendente es parte del oficialismo provincial, este se construirá como un intendente responsable por la seguridad y con el apoyo del Ministerio de Seguridad Provincial, para coordinar políticas en pos de beneficios para el municipio. Si el intendente es opositor al oficialismo provincial, este se posicionará como gestor frente a la ausencia provincial, remarcando la responsabilidad de la instancia superior.

Esta situación puede expresarse ante determinados conflictos o casos conmocionantes, como por ejemplo luego del asesinato del colectivo Leonardo Alcaraz en abril de 2018, donde funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Seguridad de la Nación responsabilizan de la “falta de seguridad” a la intendenta de La Matanza y viceversa⁴. El caso, permite visibilizar esta tensión en la responsabilización entre distintas instancias del Estado (y partidos políticos) sobre la seguridad. Lo desarrollado anteriormente, también puede observarse desde la tipología construida por Garland (2005), quien identifica distintas lógicas gubernamentales ante esto, desde medidas que niegan al delito como problema complejo y la incapacidad del estado de resolverlo: *negación*. La cual puede transformarse en disputas de actores políticos para convertirse en la expresión de la opinión pública mediante estrategias de “espectacularización contra el crimen” conocida como *acting out*; o aquellas que reconocen al delito y reparten responsabilidades de acción: *adaptación*.

Marco institucional, capacidades, iniciativas y policía

La autonomía municipal se encuentra consagrada en la Constitución Nacional de 1994, no obstante, no es reconocida por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Santa

⁴ Leandro Alcaraz, colectivo de la línea 620 en la localidad de Virrey del Pino (Partido de La Matanza) fue asesinado luego de una discusión por una tarjeta Sube. El caso tomó relevancia en la agenda pública y produjo una serie de declaraciones cruzadas entre la intendenta de La Matanza, Verónica Magario y la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Magario declaró en conferencia de prensa “*Los intendentes no somos responsables de la seguridad, nos quieren responsabilizar de lo que no funciona en la provincia*”. (Infobae; 17 de abril de 2018)

Fe, lo cual ya establece una diferencia, si tenemos en cuenta que son provincias con gran cantidad de población. Tanto Rodríguez Games, Binder y Dammert (Dammert;2007) encuentran una baja institucionalidad al respecto y limitadas herramientas permitidas desde lo legal. Rodríguez Games realiza un desglose sobre las facultades atribuidas a los municipios por cada constitución provincial y encuentra que sólo cuatro prevén la creación de cuerpos policiales municipales (Jujuy, Neuquén, San Juan y Tierra del Fuego), la mayoría solo tienen la solicitud de uso de fuerza pública a la provincia y otras no tienen información. El caso de Buenos Aires -en la cual se encuentra el objeto de estudio- tiene como única facultad tener cárceles locales para los detenidos. (Rodríguez Games, Fernandez, Sain; 2016:17-19).

Si se tiene en cuenta esta tesitura y la observamos en una perspectiva histórica, la incidencia municipal en el andamiaje institucional relacionado con los conflictos violentos y el delito era mínima, solamente relacionada a la cooperación o coordinación con organismos nacionales o provinciales. En resumen, los gobiernos locales a la actualidad se encuentran constreñidos por los mismos márgenes legales (no tienen una autonomía jurídica e institucional, facultades de dirección o gestión directa de los asuntos referidos a la conducción policial), aunque a pesar de éstos, comenzaron a intervenir de distintas formas.

Los municipios en su mayoría, no contaban con técnicas, recursos y mecanismos para poder realizar tareas de prevención o control de delitos, o hechos violentos, tampoco contaban con facultades o recursos económicos destinados específicamente al área que, sumados a la falta de funcionarios capacitados en el sector o dependencias técnicas, limitaba aún más el accionar local.

Shaw (2001) distingue en experiencias internacionales algunas tendencias de la intervención local: el cambio de enfoque hacia una óptica donde la protección es un bien público; la preocupación por generar soluciones a condicionantes sociales y económicos que favorezcan la aparición del delito; una percepción limitada de responsabilidad de la policía y el reconocimiento del papel del gobierno local por la cercanía al territorio.

Progresivamente se produce la conformación de dispositivos institucionales centrados en el abordaje de la seguridad, áreas en la estructura gubernamental (direcciones, subsecretarías, secretarías) así como comisiones en los Honorable Concejo Deliberante (HCD), destinadas al gobierno de la seguridad. Esta jerarquización permite un mayor presupuesto, como relevancia en el organigrama municipal, a pesar que las cuestiones de seguridad dentro de estas estructuras también se encuentran permeabilizadas por defensa civil, emergencias y tránsito, en su mayoría. El presupuesto destinado a estas áreas, se construye a partir de quitar de otras, debido a un sistema de financiación municipal que es reducido. Donde el presupuesto se

construye a partir de la coparticipación y las tasas a contraprestación del municipio (las cuales son delimitadas según la normativa); es por eso que en algunos municipios, dentro de la tasa general o “ABL” se encuentra alguna contribución especial vinculada a la seguridad, a fin de aumentar el presupuesto⁵.

No obstante, persisten una serie de problemas en los municipios argentinos, referidos principalmente a la falta de información (lo cual como señalamos anteriormente no es sólo un problema municipal), ausencia de análisis situacionales profundos, el desarrollo de cuadros especializados y la falta de financiación. Los problemas para el gobierno de la seguridad varían según las experiencias, encontrando en algunos casos un mayor conocimiento -como a través de la creación de observatorios- que permiten conformar cuadros de situación integral (Rodríguez Lopez, Schleider;2016). Otro problema al respecto, conectado a la falta de información, es el desarrollo de políticas a partir de las construcciones sociales de “sentido común”, o reacciones de coyuntura frente a casos en la agenda pública que conllevan a decisiones desacertadas o con falta de claridad. No obstante, este tipo de respuestas de coyuntura, exceden a las políticas de seguridad.

Referido a la relación policial - gobierno local, se considera pertinente el punto que establece Sain (Sain; 2006) (Sain; 2008), de la existencia de un modo de gestión delegativo de la política hacia la policía, aplicable también a nivel municipal. Donde los intendentes, terminan delegando gran parte de la planificación a la policía de su jurisdicción, la cual se convierte en la institución central para el abordaje de la seguridad. Es posible observarlo a partir de la financiación de los municipios hacia la policía, ex policías en puestos claves de la seguridad en el municipio, o políticas relacionadas al fortalecimiento de esta institución.

Un último punto a destacar, es en relación con las Policías Locales en la provincia de Buenos Aires, creadas por el decreto 373/14 durante el gobierno de Daniel Scioli, e ignorando la discusión de la creación por Ley en la Legislatura Bonaerense. Este decreto creó una Policía Local dependiente del Ministerio de Seguridad Provincial y donde los intendentes solo tienen un rol de coordinación y de “sugerencia” de un jefe local, que será un uniformado capacitado por la policía provincial; reafirmando esta falta de facultades de los gobiernos locales en materia de seguridad al siempre quedar en un segundo plano. Esta medida marca una transferencia de responsabilidades a los gobiernos locales al permitirles organizar la formación de las mismas, aunque no se apoyó en un traspaso de poder de control de las mismas o de financiamiento. Los casos estudiados por Lorenz y Pugliese (2017) (2018) permiten aproximaciones a su funcionamiento y características.

⁵ Un análisis pormenorizado de la situación fiscal municipal se puede encontrar en (Acosta Gloria; 2015)

Gobiernos locales y prevención

Dentro de sus limitaciones, es posible encontrar una serie de políticas llevadas a cabo por los municipios. Parto de lo planteado por varios autores, que es la prevención la actividad primordial de los gobiernos locales; sin embargo las actividades preventivas no se desarrollan hacia todo aquello que se pueda considerar delito, sino hacia un conjunto reducido de delitos, violencias y desórdenes que tienen a la ciudad como un campo de relaciones y conflicto. Retomando a Dammert, ella señala que existen tres tipos de medidas generales: control, prevención y rehabilitación, siendo la primera de capacidad limitada para lo local y pertenecientes al ámbito nacional o provincial (Dammert;2007). Según la autora, la prevención es la mejor estrategia para lo local debido a dos factores: la posibilidad de un conocimiento detallado del territorio y la capacidad de implementar iniciativas focalizadas.

Máximo Sozzo (2009) realiza una tipología sobre estrategias de prevención a partir de las políticas posibles, las construcciones teóricas que las influyen, sus virtudes y defectos. Distinguiendo tres tipos de estrategias: una estrategia situacional ambiental relacionada con las teorías que ponen el foco en situaciones o ambientes que posibilitan el desarrollo delictivo, y que se expresa en políticas de intervención física y espacial, desarrollo de mecanismos de vigilancia locales, entre otras. Estas son relevantes al lograr alterar el ambiente y ser “visibles” lo cual -aun sin medir su impacto objetivo- son efectivos en la reducción de la inseguridad. Una segunda estrategia de tipo social, la cual se basa en intervenciones que intentan modificar “*condiciones de posibilidad para que un individuo se comprometa en la realización de actividades delictivas*”. Una tercera estrategia de tipo comunitaria, basada en: el desarrollo de mecanismos de debate público y movilización de la comunidad para formar estrategias en pos de reducir las oportunidades de delito.

Es necesario remarcar que, en su mayoría, las políticas llevadas a cabo por los municipios se encuentran focalizadas en el desarrollo situacional ambiental a partir de medidas orientadas a la mejora del espacio urbano, el refuerzo mediante financiación a la policía (local como bonaerense), el desarrollo tecnológico⁶ (tanto preventivo como post hecho) a partir de videovigilancia, puestos de control, sistemas vecinales de protección, entre otras. La prevención situacional-ambiental, se expresa en la manipulación del ambiente con énfasis en estrategias *micro preventivas*, buscan principalmente modificar el ambiente y el “blanco” de posibles delitos a través de: la vigilancia natural, la manutención del espacio público y el

⁶ Un ejemplo al respecto de esta cuestión -en donde también se encuentran tensiones con el rol municipal- se puede observar en (Galvani, Ríos y Cañaveral;2013)

control natural de accesos, el endurecimiento o modificación del “blanco” entre otras. Por último, que la centralidad de las políticas municipales sean de carácter situacional-ambiental, también responde a las capacidades señaladas anteriormente y la lógica de funcionamiento. Es decir, para los municipios el desarrollo del espacio urbano, es una prerrogativa desde su creación y, por lo tanto, cuenta con mayor presupuesto para el mismo.

¿Qué entender por seguridad local?

Defino como *Seguridad local* a las estrategias e intervenciones de un gobierno local o municipio que, a partir de su cercanía al territorio, genera políticas frente a determinados hechos como: la violencia, los desórdenes urbanos (tales como el consumo de alcohol, las peleas callejeras, deficiencias de mobiliarios, etc) y el conjunto de delitos predominantes en la ciudad (robo en la vía pública, hurto, robo de automóviles, etc). Por su lugar en la estructura del Estado (al no tener delegación de tareas orgánicas y funcionales), la seguridad local se basa en la intervención del espacio a través del desarrollo de políticas de carácter preventivo, la articulación o cooperación con las instituciones de control o gubernamentales, y la relación con la participación comunitaria en función de optimizar la protección ciudadana. De esta manera recuperando a Binder, se pueden plantear tres dimensiones de la política de seguridad a nivel local: las propias a partir de sus herramientas de intervención, las que realice en coordinación con programas provinciales, y las de integración con instituciones y políticas federales, como por ejemplo el Programa Integral de Protección Ciudadana.

En este caso, la seguridad local no contempla todos los hechos que ponen en riesgo al ciudadano, sino que se centra en aquellos ocurridos en la ciudad y son construidos como problemáticos; a partir de esta lógica, los delitos de cuello blanco, por ejemplo, quedan de lado. Relacionado a esto, las intervenciones territoriales también tienen como objetivo a aquellas prácticas que son consideradas como “desórdenes” o generadores de condiciones de violencia o delito (por ejemplo, el control de nocturnidad). Por último, dentro de lo considerado violencia, se pueden encontrar medidas contra la violencia familiar o la violencia de género a partir de protocolos o mecanismos de acción institucional; especialmente en el último tiempo los referidos a la violencia de género, que se ha instalado en las agendas gubernamentales.. En estos casos como en los anteriores, el centro de la *seguridad local*, al igual que en la *seguridad ciudadana*, es el ciudadano del municipio.

Aproximación a dos casos de estudio: Quilmes y Avellaneda (2015-2018)

Ambos casos fueron analizados en el periodo 2015-2018, a pesar que en el caso de Avellaneda, se recuperen algunas cuestiones de las administraciones anteriores debido a su continuidad. El objetivo de la investigación es, principalmente, estudiar las políticas públicas llevadas a cabo para el gobierno de la seguridad por ambos municipios.

En Quilmes, Martiniano Molina perteneciente a la Alianza Cambiemos triunfó en el municipio, derrotando a Francisco “Barba” Gutiérrez (FPV) quien se presentaba a su 3° periodo. Molina como candidato se construye con un discurso muy cercano a las ideas y valores promovidas por el PRO, centrado principalmente en la resolución de problemas como forma de gestión y como un *outsider* de la política. Durante la campaña electoral, puso énfasis en la inseguridad como problema principal del municipio a resolver, así como del gobierno de Gutiérrez. Luego de su triunfo, en diciembre de 2015 como una de las primeras medidas de su gestión, crea la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano, jerarquizando la dependencia, respecto a la administración anterior (existía una Subsecretaría de Seguridad Ciudadana). Entre finales de 2015 y 2018, Quilmes tiene seis secretarios de seguridad con distintos perfiles que dejarán el cargo por diferentes situaciones.

En el caso de Avellaneda, el municipio es gobernado por Jorge Ferraresi desde un interinato en 2009 y luego ganando las elecciones de 2011 y 2015. Vinculado al peronismo y al Frente para la Victoria, el municipio de Avellaneda se convierte en uno de los municipios más cercanos e identificados con las políticas del partido y del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, durante la campaña del 2015 en Avellaneda, el discurso del intendente refuerza los símbolos y logros de estas gestiones y de un modelo político, sobre problemas específicos. El gobierno de la seguridad en este municipio se encontraba desde 2013 hasta 2017 en una Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dentro de la Jefatura de Gabinete; a mediados de 2017 durante la campaña de medio término, se convierte en una Secretaría de Seguridad Ciudadana. A diferencia de Quilmes, Avellaneda mantiene su subsecretaría desde 2013 hasta mediados de 2018, que sería reemplazada.

Como antecedentes, ambos municipios formaron parte del Programa Integral de Protección Ciudadana y adhirieron a la creación la Policía Local en 2014. Cuentan con sendas comisiones de seguridad en los HCD, así como recibieron el “Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad” por parte de la Provincia de Buenos Aires durante 2016. Entendiendo que, la relación que los municipios tienen con determinadas políticas llevadas a cabo por instancias superiores, son adheridas por Quilmes y Avellaneda en los distintos periodos.

La forma de construir el problema por parte de los funcionarios y del intendente de Avellaneda, se plantea bajo un paradigma de “seguridad democrática”, donde buscan alejarse de la relación delito-pobreza. De aquí que rechazan el punitivismo como forma de resolución del problema y encuentran en el desarrollo de medidas de carácter social y de políticas de integración, la mejor forma de resolverlo. A su vez, la seguridad desde la secretaría se basa en una prevención de carácter comunitario, pretendiendo asegurar la convivencia de los vecinos como ejes principales. Aquí se encuentra una contradicción con las distintas medidas que luego llevan a cabo, más cercanas a la prevención situacional-ambiental. Aunque esta visión comunitaria de la seguridad, se refleja en la forma que piensan y ejecutan la policía local -por lo menos desde el discurso- la cual debe ser de “proximidad” al vecino.

Mientras que en Quilmes, si observamos la definición y objetivos dentro del “Plan estratégico Quilmes 2030”, así como en el presupuesto, se plantea como central *“Recuperar el espacio público como punto de encuentro ciudadano. La seguridad se optimiza en función de la cantidad de gente activa en la calle”*. El plan define cuatro causas de la inseguridad: altos índices de vulnerabilidad social, deserción de estudios secundarios, droga y poca presencia policial en espacios públicos. También Martiniano Molina, reproduce una lógica de “problema que afecta a la población” a la cual se debe “dar la batalla”; esta serie de perspectivas se acercan más a relacionar delito con pobreza.

Políticas en Avellaneda

Dentro del conjunto de políticas implementadas para el gobierno de la seguridad, el desarrollo de la policía local es la principal impulsada por el municipio tanto discursivamente como financieramente. Como señalamos anteriormente, los principales actores del municipio plantean el rol de la policía local como clave en la construcción de seguridad, principalmente a través de la prevención y la proximidad al territorio. La ausencia de “confianza” por parte de la ciudadanía hacia la policía -representada por la Policía bonaerense principalmente- es uno de los ejes que el municipio busca resolver. De este modo, la policía local busca recuperar la confianza del vecino, así como a la fuerza de seguridad en general; en este punto también desde los propios funcionarios, se da una mayor relevancia al desarrollo de la fuerza como capaz de superar la “ineficacia” percibida por la población (Lorenz, Pugliese; 2017).

Avellaneda invierte en la construcción de bases de la policía local en sus distintas localidades, en busca de descentralizar su cobertura. En total contabilizan nueve, distribuidas entre las localidades del municipio; al mismo tiempo, instalará puestos fijos para la local -también nueve-. Estos son ubicados en zonas de transición, consideradas problemáticas o de recreación, a fin de tener presencia en el territorio. En la misma línea, se encontró dentro del

HCD, propuestas de instalar garitas policiales en algunas zonas a partir de reclamos. De esta forma, ambos dispositivos buscan generar un mayor control de las diferentes zonas. La compra o reparación de móviles policiales es otra de las políticas desarrolladas por el municipio, se encuentran diversas entregas tanto a la Policía Local como al Comando de Patrullas Comunitario (CPC) de camionetas o móviles. Esta política no solo es desarrollada por el municipio, sino que también se realizan entregas desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires hacia el gobierno local.

Existen también, un compendio de medidas de carácter situacional-ambiental que se vinculan al desarrollo de “mayor seguridad”. La renovación de la luminaria del municipio por luces led, la recuperación de plazas y espacios públicos, se plantean en esa lógica. También en este sentido, el municipio en cooperación con las distintas fuerzas, lleva a cabo a partir del 2017 el “Operativo Aurora” el cual se basa en el control y presencia policial en los horarios de entrada y salidas de establecimientos educativos, así como el control de las cámaras en esas zonas y la entrega de botones antipánico a los establecimientos y comercios. Debe tenerse en cuenta también, el desarrollo de distintos operativos de “saturación” por parte de la policía en coordinación con el municipio.

Se encuentra un énfasis desde el municipio en el desarrollo tecnológico y de TICS para la seguridad, principalmente vinculadas a la videovigilancia. El mejoramiento del Centro de Operaciones Municipal (COM) y la instalación de cámaras, son el eje de esta política; es así que se encuentran anuncios de la adhesión de nuevas cámaras -con mejores especificaciones- al municipio para obtener un mayor control de la ciudad. Al 2018, el municipio dice tener más de 650 cámaras instaladas. Destacando el financiamiento para la instalación de los recursos necesarios para su funcionamiento: inversión en fibra óptica, torres de comunicación y un datacenter, a partir de una empresa privada que provee estos sistemas. La lógica de trabajo de videovigilancia busca que desde el COM, module con los operadores de radio de la Policía Local, CPC y la distrital ante distintos eventos. El trabajo de monitor se divide en turnos de 6 hs y con horarios definidos a concentrarse en determinadas actividades.

En 2017, se reactivan los Foros Vecinales de Seguridad⁷, intentando que se conforme uno por localidad a partir de distintas organizaciones locales; así como distintos tipos de reuniones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con vecinos en distintos lugares. El objetivo de los foros es generar diagnósticos, mapas del delito comunitarios, evaluar el funcionamiento de la

⁷ Es pertinente destacar, que los Foros se organizan durante la campaña electoral de 2017, donde la subsecretaria de ese momento, era primera candidata a concejal por el oficialismo.

policía en la zona e impulsar acciones de prevención del delito y la violencia, así como la integración con distintas instancias estatales.

Políticas en Quilmes

Muchas de las políticas señaladas anteriormente, se encuentran en este caso, por lo tanto se describirán de manera breve. A diferencia de Avellaneda, al ser un municipio con mayor afinidad al gobierno provincial existen mayores aportes por parte del Ministerio de Seguridad provincial. El presupuesto nos permite una visión general de lo desarrollado por la secretaría: contemplando a sus recursos humanos, la compra y mantenimiento de móviles de defensa civil, la colaboración en el mantenimiento de los móviles de la policía, la colocación y reparación de cámaras de seguridad, cartelería vial, corredores escolares, contratación de policías adicionales y aprovisionamiento a inspectores, entre otras (ya que además se encarga de cuestiones referidas al tránsito, defensa civil, etc.).

Quilmes no enfatiza tanto en el desarrollo de la policía local, desde la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano se plantea la necesidad de una mayor preparación para poder desarrollar sus tareas, es así que llevan a cabo desde 2015 distintas capacitaciones. En comparación con Avellaneda, se centraliza en una sola base. El eje principal es la prevención a partir de la cercanía territorial, principalmente en zonas concurridas, así como la instalación de destacamentos en zonas de transición o determinados “puntos de acceso” como se señaló anteriormente. También lleva a cabo entregas o reparaciones de móviles policiales; siendo en este caso con mayor apoyo de la Provincia de Buenos Aires para su incorporación.

La videovigilancia se convierte en el centro de la política de seguridad del municipio; además de la instalación de cámaras (alrededor de 450 en lo que va del 2018 según la Secretaría), se llevan a cabo una serie de mejoras en comunicaciones para las modulaciones de la policía, así como el tendido de fibra óptica para el control de cámaras y el software para el desarrollo de un mapa del delito. Además se creó un Centro Único de Monitoreo (CUM), en reemplazo al anterior -el cual tenía una serie de denuncias por su funcionamiento, para integrar el control de cámaras con los distintos servicios de emergencia del municipio, reforzando la videovigilancia como aspecto clave de la seguridad.

Se reparten también alarmas vecinales y botones antipánicos en distintos sectores del municipio, principalmente en escuelas. Además, en 2016 el municipio comienza a implementar una ordenanza aprobada en 2012 y nunca llevada a cabo, para desarrollar “Corredores escolares seguros” con las mismas características que el “Operativo Aurora”. Además, el municipio coordina al menos dos veces con nación la realización de un “Plan

desarme” consistente en entregar dinero a quienes entreguen armas en el CUM, sin papeles ni control de su procedencia.

El desarrollo de luminarias, plazas así como de avenidas, son también incluidas dentro de medidas para “mejor seguridad”. En esta lógica situacional-ambiental, el municipio recibe fuerzas federales a partir de un convenio con Nación⁸, siendo Prefectura Naval y Policía Federal; la primera se encarga de realizar controles vehiculares mientras que la segunda se utiliza para la investigación de delitos complejos. Por último, existe una énfasis desde la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano en la realización de operativos de saturación en conjunto con las diversas fuerzas que se encuentran en el territorio. Estos se realizan en determinados barrios y villas de emergencia consideradas “problemáticos” en los cuales la policía durante un día realiza controles vehicular y poblacional en el territorio.

Por último, en el estudio de ambos casos se han encontrado una serie de problemas: primero, el anuncio sobre la aplicación, es decir, grandes anuncios que después no se encuentran justificados en la acción del municipio. Segundo, problemas en la implementación o mantenimiento de estas políticas: cámaras sin funcionar, la falta de respuesta de los centros de monitoreo, problemas al interior de las policías locales por su falta de entrenamiento, la implementación segmentada de los corredores escolares, puestos fijos policiales sin personal, operativos selectivos, entre otras, son parte también del cuadro de situación construido.

Conclusiones

En el recorrido del texto, se intentó poner en discusión la relación seguridad - gobiernos locales, planteando las características de la misma; desde un corpus bibliográfico reducido y siendo un objeto poco abordado. De aquí, que no se han encontrado estudios de casos sobre esta relación en Argentina. Frente a esto, se intentó reвер los conceptos de seguridad a fin de proponer una idea de *Seguridad local* que permita observar y describir los casos.

El abordaje de Quilmes y Avellaneda permiten poner al concepto en discusión: la jerarquización de la estructura municipal, así como la centralidad de la seguridad dentro de las políticas locales, reflejan la responsabilización de los actores locales. Desde esta perspectiva, se sostiene que las políticas públicas llevadas a cabo por ambos municipios con gobiernos políticamente distintos, son de carácter similar -centrados en un abordaje primordialmente social-ambiental-. Las políticas tienen más puntos en común que distancias, quitando el rol dado a la policía local en cada caso -la cual no obstante es una diferencia

⁸ El municipio de Avellaneda también recibe fuerzas federales dentro del mismo convenio; sin embargo no existe precisión de cuál fuerza y en qué actividades

relevante- y con un énfasis en lograr mayor control o presencia territorial. Encontrándose una misma forma de gobernar la seguridad local, donde más allá de las limitaciones como gobierno municipal, existe una forma de concebir políticas de seguridad más allá de los discursos y las distancias políticas, a pesar de encontrar desde estas posiciones políticas distintas, discursos, visiones y diagnósticos diferentes sobre el abordaje de la seguridad.

La instalación de puestos fijos para control territorial, la entrega de móviles, el desarrollo de la videovigilancia y el monitoreo, el mejoramiento de condiciones de la ciudad como forma de aumentar la seguridad, los operativos específicos en las escuelas, los botones antipánicos, son compartidos por ambos casos de estudio. Planteando la distancia en un mayor desarrollo comunitario -con los foros vecinales- por parte de Avellaneda. Además, se han detectado los mismos problemas en las políticas, principalmente con el mantenimiento y situación de las cámaras de vigilancia; donde en el desarrollo del trabajo se han encontrado una gran cantidad de denuncias y reclamos debido al no funcionamiento, o no entrega del material en la justicia ante determinados hechos. Así como en la actividad de la policía local, donde a pesar de no tener el control directo, tienen un peso sobre las decisiones del jefe local. Todo estos puntos de discusión llevan a pensar algo no planteado en el trabajo e importante para el análisis: el rol de ese tipo de políticas implementadas, es decir, preguntarse si estas políticas son útiles para reducir el número de delitos cometidos y reducir la victimización, o si son útiles para reducir la sensación de inseguridad de la población.

Un último punto central, es la ausencia de diagnósticos sobre las situaciones en cada territorio, así como de la construcción de cifras claras más allá de los partes policiales y lo recabado por el Ministerio Público Fiscal. Siendo necesario para el desarrollo de políticas, mayores capacidades técnicas que permitan un mejor relevamiento; la creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana en Avellaneda se encuentra en esa vía.

Todo esto refuerza la necesidad de observar y discutir el rol de los gobiernos locales en el gobierno de la seguridad, quienes a pesar de sus limitaciones legales y presupuestarias, encontraron formas de acción tanto independientes como dependientes, con lo cual no es posible desligarse del desarrollo de políticas públicas. Es necesario pensar en medidas no solo para la coyuntura electoral, sino con visiones a largo plazo y en una lógica que no reproduzca en su totalidad a la policial. No obstante, en la estructura del Estado actual, la responsabilidad recae principalmente en los gobiernos provinciales o nacionales, lo cual conlleva a plantear la necesidad del desarrollo de mecanismos que permitan una mayor autonomía de los municipios a la hora de llevar a cabo medidas -así como de control al interior de las

instituciones- para el gobierno de la seguridad, que puedan aprovechar el conocimiento -o lograr desarrollarlo- del territorio para llevar a cabo estrategias e iniciativas focalizadas.

Bibliografía

- Acosta, Gloria [et al.] (2015). La estructura de la recaudación municipal en la Argentina: alcances, limitaciones y desafíos. Colección textos institucionales; 12. 1a ed. Universidad de General Sarmiento, Los Polvorines.
- Binder, Alberto M. (2016). Seguridad en el municipio y usos de la información sobre la criminalidad, la violencia y el delito. En: Martín Appiolaza ... [et al.] (2016). *Municipios: los nuevos actores de la seguridad ciudadana*; ILSED; Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Castel, Robert (2006). *La inseguridad social: ¿Que es estar protegido?*. Buenos Aires, El Manantial.
- Dammert, Lucía (2007). Seguridad publica en America Latina. ¿Que pueden hacer los gobiernos locales? En *Nueva Sociedad*, n° 212, noviembre-diciembre 2007. Disponible en www.nuso.org
- Fernández, Santiago Andrés. Rodríguez Games, Nicolás Eduardo. Saín, Marcelo Fabián. (2016). *Seguridad y gobiernos locales en Argentina*, Ciudad de Buenos Aires, UMET.
- Galar, Santiago (2017). “Problematizar el problema. Apuntes para complejizar el abordaje de la inseguridad en la dimensión pública”, *Papeles de Trabajo*, 11 (19), pp. 61-76.
- Garland, David. (2005). *La cultura del control*, Barcelona: Gedisa
- Gomez Rojas, Claudia Patricia (2008). Elementos para la construccion de politicas de seguridad ciudadana. En: Velez; Freddy River (2008). *Seguridad multidimensional en America Latina*. Flacso. Quito- Ecuador
- Kessler, Gabriel. (2009) *El sentimiento de inseguridad: sociología del temor al delito*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Kessler, Gabriel. Bruno, Matias (2018). Inseguridad y vulnerabilidad al delito. En: Piovani, J.A. Salvia, A (coord.) (2018). “*La Argentina en el siglo XXI*”. Siglo XXI, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. pp 329-357
- Ibarómetro (2017). Clima político y balance del gobierno nacional. Disponible en: <http://www.ibarometro.com/newsite/wp-content/uploads/2016/08/Monitor-nacional-de-opini%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf>
- INDEC (2018). Encuesta Nacional de Victimización 2017. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Latinobarómetro (2016). Informe 2016. En: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Lorenc Valcarce, Federico (2005). “La sociología de los problemas públicos, una perspectiva crítica para el estudio de las relaciones entre la sociedad y la política”, *Nómadas. Revista de Ciencias Sociales y jurídicas*, N°12, pp.141-150, disponible online: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18101210>.
- Lorenz, Mariana y Pugliese, Ornela (2017). ¿Que hay de nuevo en las Unidades de Policia de Prevencion Local?. En: *Revista Delito y Sociedad*. N° 43. 1° Semestre de 2017. pp 121-149.

- Lorenz, Mariana y Pugliese, Ornella (2018). El gobierno local de la seguridad pública. Las unidades de Policía de Prevención Local de dos municipios del Gran Buenos Aires. En: Revista Trabajo y Sociedad. N° 31. Invierno 2018. pp 87-105.
- Míguez, Daniel. Isla, Alejandro (2010), Entre la inseguridad y el temor: Instantáneas de la sociedad actual. Buenos Aires: Paidós.
- Muggah, Robert (2017) El auge de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe , *International Development Policy | Revue internationale de politique de développement*. Disponible en: <http://journals.openedition.org/poldev/2512>
- PNUD (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: SEGURIDAD CIUDADANA CON ROSTRO HUMANO: diagnóstico y propuestas para América Latina. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Recasens, Amadeu Brunet (2007). La Seguridad y sus políticas. Barcelona. Atelier
- Rodríguez Lopez, Diana. Schleider, Tobias J (2016), *Los observatorios como política de gestión de la información. Marco teórico. Antecedentes y procesos de desarrollo. Tipos de observatorios en la región. Los casos de Bogotá y Mar del Plata*. En: En: Martín Appiollaza ... [et al.](2016). *Municipios: los nuevos actores de la seguridad ciudadana*; ILSED; Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Rios, A. Galvani, M. Cañaveral, L.(2013). Seguridad, policía y gobiernos locales: el Programa integral de Protección Ciudadana (Provincia de Buenos Aires, Argentina, 2009-2013). Clacso. Buenos Aires.
- Ruiz Vásquez, Juan Carlos (2005). La seguridad ciudadana y las dinámicas locales. En *Papel Político*, N° 18, pp. 155-187.
- Saín, Marcelo (2002). Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en América Latina, FCE, 2002.
- Saín, Marcelo (2007). Los gobiernos municipales argentinos ante la seguridad pública (1990-2005). En: Cravacuore, D. Israel, R (coord). *Procesos políticos comparados en los municipios de Argentina y Chile : 1990-2005*, Universidad Nacional de Quilmes, pp 293-320
- Saín, Marcelo Fabián. (2008) *El leviatán azul: policía y política en la Argentina*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Salazar, Victor (2007). La prevención situacional del delito en espacios públicos urbanos. En: Dammert, Lucia y Zuñiga Liza (ed) (2007). *Seguridad y violencia: desafíos para la ciudadanía*. Santiago , Chile: FLACSO, 2007, pp 189-212.
- Shaw, Margaret (2001). *El papel del gobierno local en la seguridad de las comunidades*. Montreal: Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad
- Sozzo, Máximo. (2009). Gobierno local y prevención del delito en la Argentina. *URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, N° 6, Quito, FLACSO Ecuador, pp. 58-73.
- Subirats, J. Knoepfel, P. Larrue, J y Varone, F (2008). *Análisis y gestión de políticas públicas*. Barcelona, Ariel, 2008
- Verónica Magario: "Los intendentes no somos responsables de la seguridad". (17 de Abril de 2017). Infobae. Disponible en: <https://www.infobae.com/politica/2018/04/17/veronica-magario-los-intendentes-no-somos-responsables-de-la-seguridad/>

Los hechos y los datos de políticas de Quilmes y Avellaneda fueron relevadas de las siguientes webs, todas consultadas al 10/09/2018

- <http://www.quilmes.gov.ar/noticias/>
- <http://www.mda.gob.ar/>
- <http://www.a-seguridad.com.ar/>
- Diario Perspectiva Sur <http://www.perspectivasur.com>
- El Termometro Web <http://eltermometroweb.com/>
- La Ciudad Avellaneda Web <https://laciudadavellaneda.com.ar/>